

1.- La Constitución de 1978:

- a) Es una constitución breve, normativa y cerrada.
- b) Es una constitución extensa, normativa y abierta.
- c) Es de mediana extensión y sin apenas influencias del constitucionalismo europeo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- Los principios jurídicos que recoge el artículo 9.3 de la CE:

- a) Dejan de ser jurídicos y pasan a ser constitucionales una vez que se incluyen en su texto.
- b) Siguen siendo principios jurídicos, pero una vez constitucionalizados gozan del rango de constitucionales.
- c) Al ser parte de la Constitución dejan de ser principios jurídicos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3.- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica establecidos en la Constitución:

- a) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero en ningún caso podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria.
- b) Podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, pero solo de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
- c) Al tratarse de principios inspiradores únicamente orientan la actuación de los poderes públicos, que no se hayan sometidos a ellos.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

4.- Los derechos reconocidos en los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la Constitución, en relación con la duración de la detención preventiva, la información al detenido y la no obligación de declarar:

- a) Pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, según determine una ley orgánica.
- b) No pueden ser suspendidos en ningún caso, por tratarse de derechos fundamentales recogidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución.
- c) Pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de sitio en los términos previstos en la Constitución.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

5.- ¿Qué órgano constitucional debe reconocer la imposibilidad del Rey para ejercer sus funciones constitucionales?:

- a) El Gobierno.
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El Tribunal Constitucional.
- d) Las Cortes Generales.

6.- El efecto del refrendo es el siguiente:

- a) Confiere validez al acto refrendado.
- b) Implanta la responsabilidad en el Rey.
- c) Traslada la responsabilidad a las Cortes Generales.
- d) Traslada la responsabilidad del acto al refrendante.

7.- Las Cortes Generales:

- a) Son un órgano permanente.
- b) No son permanentes, porque se disuelven periódicamente.
- c) Es permanente el Congreso de los Diputados, pero no el Senado, que se disuelve entre legislaturas.
- d) Es permanente el Senado, pero no el Congreso de los Diputados, que se disuelve entre legislaturas.

8.- La representación del pueblo español la tiene atribuida:

- a) Solo el Congreso de los Diputados.
- b) Las Cortes Generales y también sus miembros de forma individual.
- c) Solo el Senado.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9.- El número de Ministros:

- a) Viene establecido en la Constitución.
- b) Se establece en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- c) Se establece en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
- d) Lo establece el Presidente del Gobierno.

10.- Las Comisiones Delegadas del Gobierno:

- a) Son creadas por acuerdo del Consejo de Ministros.
- b) Conocen de cuestiones que afectan a varios Ministerios.
- c) Solo pueden ser suprimidas por acuerdo del Consejo de Ministros.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11.- El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que está integrado por:

- a) Su Presidente, nombrado por un período de diez años de entre los miembros del Tribunal Supremo, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
- b) Los Presidentes y Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
- c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, de los cuales doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia.
- d) El gobierno del Poder Judicial no corresponde al Consejo General del Poder Judicial, sino al Ministro de Justicia.

12.- Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por las leyes, sin embargo:

- a) A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.
- b) A los solos efectos prejudiciales, únicamente los Tribunales y Juzgados del orden jurisdiccional civil podrán conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.
- c) La existencia de una cuestión prejudicial penal que condicione directamente el contenido de la debida decisión deberá ser resuelta por los órganos penales a quienes corresponda.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

13.- Según la Carta Europea de Autonomía Local:

- a) Por autonomía local se entiende la facultad de servir con objetividad los intereses públicos que les están encomendados, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- b) Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
- c) Por autonomía local se entiende la garantía institucional que fija el reducto indisponible o núcleo esencial de la institución garantizado por una Constitución.
- d) La garantía institucional que supone la autonomía local no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de la institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar.

14.- De acuerdo con la Constitución española de 1978:

- a) El gobierno y administración de los municipios corresponde a los Alcaldes, elegidos por los concejales o por los vecinos.
- b) El gobierno y administración de los municipios corresponde a los Alcaldes, elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- c) El gobierno y administración de los municipios corresponde al Pleno, integrado por todos los concejales y presidido por el Alcalde.
- d) El gobierno y la administración de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

15.- De acuerdo con el Título II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos la aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas, si bien se trata de una atribución delegable en la Junta de Gobierno Local o en el Alcalde.
- b) Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos la aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas, pero la atribución de aprobar las ordenanzas es delegable en la Junta de Gobierno Local o en el Alcalde.
- c) Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos la aprobación del Reglamento Orgánico, mientras que la aprobación de las ordenanzas es una atribución de la Alcaldía. En ambos casos son delegables.
- d) Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos la aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas, atribución indelegable.

16.- La facultad de dictar bandos:

- a) Está reservada para el Alcalde-Presidente de la Corporación municipal.
- b) Es una atribución del Alcalde-Presidente de la Corporación municipal, pero de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, puede ser delegada.
- c) Es una atribución del Alcalde-Presidente de la Corporación municipal, pero de acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal de Mogán puede ser delegada.
- d) Es una atribución tanto del Alcalde-Presidente como del Pleno municipal, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias.

17.- En materia competencial:

- a) Los municipios no pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas, pero el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
- b) Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
- c) Entre las competencias que se pueden delegar a los municipios no están las de vigilancia y control de la contaminación ambiental ni la de protección del medio natural, competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

18.- De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además de los que se deben prestar en todos los Municipios, los de parque público, biblioteca y tratamiento de residuos.
- b) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además de los que se deben prestar en todos los municipios, los de protección civil, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y medio ambiente urbano.
- c) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, biblioteca, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19.- La creación de un órgano administrativo exigirá:

- a) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- b) Delimitación de sus funciones y competencias.
- c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

20.- En el caso de la avocación de competencias:

- a) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
- b) En la Administración Local no se permite la avocación de competencias.
- c) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21.- De acuerdo con la Ley 39/2015, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

- a) Únicamente la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
- b) Además de las expresadas en a), los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- c) Además de las expresadas en a) y b), las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas, cuando ejerzan potestades administrativas.
- d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.

22.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

- a) Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
- b) Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya transcurrido más de dos años desde el hecho o el acto que motive la indemnización.
- c) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, pero en el caso de daños a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

23.- En relación con la obligación de resolver recogida en la Ley 39/2015: [Art. 21 Ley 39/2015]

- a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia de parte, pero no en los iniciados de oficio.
- b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, exceptuando, entre otros, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio
- c) En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración está obligada a dictar resolución expresa solo si el inicio del procedimiento tiene su origen en una denuncia.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

24.- El silencio administrativo tiene efecto desestimatorio:

- a) Siempre y en todo caso.
- b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, en los procedimientos de impugnación de actos y decisiones, y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
- c) Solo en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable a España así lo establezcan.
- d) Siempre que el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o a su ejercicio.

25.- El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición:

- a) El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
- b) El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso, y de seis meses para actos presuntos, en este caso a contar a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- c) El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de dos meses, si el acto fuera expreso, y no cabe recurso contra actos presuntos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26.- El recurso extraordinario de revisión:

- a) Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión, en los casos previstos en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, en el plazo de cuatro años desde que el acto se haya dictado.
- b) Para la interposición del recurso extraordinario de revisión, dadas las causas de interés general que concurren, no existe un plazo determinado.
- c) No cabe cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida si estos documentos son posteriores.
- d) Cuando el recurso de revisión tenga su causa en la existencia de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, el plazo para su interposición será de tres meses desde la firmeza de la sentencia.

27.- Al orden jurisdiccional contencioso administrativo

- a) No le corresponden las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil y penal, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública, pero si las del orden social en relación con su personal laboral.
- b) Le corresponden todas las cuestiones relacionadas con la actividad de la Administración Pública.
- c) Le corresponden todas las cuestiones relacionadas con la actividad de la Administración Pública, excepto en materia contractual cuando los contratos en cuestión no puedan considerarse contratos administrativos.
- d) No le corresponden las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública.

28.- Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

- a) Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera, y las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros.
- b) Conocerán de los recursos que se deduzcan contra las disposiciones generales emanadas de las Entidades locales, pero no de las emanadas de las Comunidades Autónomas, que son competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

c) Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

d) Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, pero no frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, por ser estos competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

29.- Ante un acto anulable de una administración local:

a) La administración de la Comunidad Autónoma está legitimada para impugnarlo ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos en la ley.

b) La Administración autora de dicho acto no está legitimada para impugnarlo debido al principio de sometimiento a los propios actos.

c) Cabe su impugnación, previa declaración de lesividad, que no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de todos los interesados en el mismo.

d) Se podrá iniciar un procedimiento de revisión de oficio, que requiere informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

30.- En el procedimiento abreviado:

a) Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

b) En el escrito de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan.

c) Los medios de prueba se practicarán, en cuanto no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.

d) Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil.

31.- Cuando la Administración fuera condenada al pago de cantidad líquida y la ejecución de la sentencia pueda suponer un trastorno grave a su Hacienda:

a) La Administración condenada lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para dicha Administración.

b) La Administración condenada lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda y del Juez o Tribunal, quedando la ejecución en suspenso hasta que el Ministerio de Hacienda pueda habilitar, en el siguiente ejercicio presupuestario, los fondos necesarios para la ejecución.

c) La Administración condenada lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda y del Juez o Tribunal, para que, oídas las partes, el Juez o Tribunal pueda decretar la suspensión de la ejecución hasta que el Ministerio de Hacienda pueda habilitar, en el siguiente ejercicio presupuestario, los fondos necesarios para la ejecución.

d) La Administración condenada lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda y del Juez o Tribunal, para que, *inaudita parte*, el Juez o Tribunal decrete la suspensión de la ejecución hasta que el Ministerio de Hacienda pueda habilitar, en el siguiente ejercicio presupuestario, los fondos necesarios para la ejecución.

32.- Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

a) Cabe siempre recurso de apelación, que se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia y resolverá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

b) Solo cabe recurso de apelación contra las sentencias dictadas en asuntos cuya cuantía exceda de 30.000 euros.

c) Si la sentencia resuelve un litigio entre Administraciones públicas cabe siempre recurso de apelación

d) Solo cabe recurso de apelación contra las sentencias dictadas en asuntos cuya cuantía exceda de 20.000 euros.

33.- El recurso de casación:

a) Habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: a) abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción; b) incompetencia o inadecuación del procedimiento; c) quebrantamiento de las formas esenciales del juicio; d) o infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia.

b) Podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

c) No podrá interponerse contra sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía no exceda de 300.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34.- En el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona:

- a) El plazo para interponer el recurso será de diez días, que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites.
- b) El plazo para interponer el recurso es de un mes desde la fecha del acto impugnado o seis meses si se trata de un acto presunto.
- c) Sirve para recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 3º del Título I de la Constitución.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

35.- La cuestión de ilegalidad:

- a) Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de una disposición general aplicada, el demandante podrá plantear, mediante demanda dirigida al Tribunal competente para fallar la cuestión, la cuestión de legalidad, acompañando testimonio de la sentencia firme estimatoria.
- b) Si la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no considera ilegal el contenido de la disposición general aplicada, la sentencia de instancia queda automáticamente anulada.
- c) La cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 de la Ley 29/1998 podrá ser planteada por el Juez o Tribunal, mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

36.- El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la administración:

- a) Se recoge en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y es único e invariable para todos los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- b) Se recoge en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, pero existe un procedimiento general y otro abreviado.
- c) Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 ya no existe un procedimiento diferente para la exigencia de responsabilidad patrimonial y se utiliza el procedimiento administrativo ordinario en todos sus términos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37.- En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la indemnización, podrá acordar suspender el procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
- b) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando el cálculo de la cuantía de la indemnización sea inferior a 6000 euros.
- c) Solo se tramitará un procedimiento abreviado cuando la valoración del daño que consta en la reclamación sea inferior a 6000 euros.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38.- Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio:

- a) El tribunal civil lo pondrá en conocimiento del Juez de lo Penal de la circunscripción donde el supuesto delito fue cometido, por si hubiera lugar al ejercicio de la acción penal.
- b) El tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiera lugar al ejercicio de la acción penal.
- c) En todo caso, se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil, hasta el pronunciamiento del Juez de lo penal.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

39.- La comparecencia en el juicio civil:

- a) Será siempre por medio de procurador, que habrá de ser Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio.
- b) El litigante podrá comparecer por sí mismo en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 3.000 euros.
- c) Podrá ser por medio de abogado cuando la comparecencia de este se realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40.- En el proceso civil, la presentación de escritos y documentos, si estuviere sujeta a plazo:

- a) Podrá efectuarse hasta las 23.59 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, si su forma de presentación fuera telemática.
- b) Podrá efectuarse hasta las 23.59 horas del día del vencimiento del plazo, si su forma de presentación fuera telemática.
- c) Podrá efectuarse hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, si su forma de presentación fuera telemática.
- d) Podrá efectuarse hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, cualquiera que fuera la forma de presentación.

41.- En el proceso civil, los actos procesales de comunicación serán:

- a) Mandamientos, oficios y providencias.
- b) Citaciones, mandamientos, oficios, providencias y requerimientos.
- c) Notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos, oficios y providencias.
- d) Notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios.

42.- De acuerdo con la regulación de las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo juicio podrá prepararse:

- a) Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.
- b) Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.
- c) Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43.- Son cuestiones incidentales:

- a) Las que siendo distintas de las que constituyan el objeto principal del pleito, guarden con este relación inmediata y las que se susciten respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso.
- b) La que se planteen durante el pleito pero, por no guardar con este relación inmediata, deben resolverse en un procedimiento incidental.
- c) Cualquier incidencia que se suscite durante el pleito y no se refiera a su objeto principal.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

44.- Se decidirán en el juicio declarativo ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

- a) Las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión de un cosa.
- b) Las demandas que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
- c) Las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.
- d) Las demandas que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga e ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.

45.-En la demanda civil se hará constar obligatoriamente:

- a) Los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado, el domicilio o residencia en que puedan ser emplazados, mención del nombre y apellido del procurador y del abogado cuando intervengan, los hechos, los fundamentos de derecho, y la petición.
- b) Los datos y circunstancias de identificación del actor, la filiación del demandado, los hechos, los fundamentos de derecho y la petición.
- c) Existe libertad de forma en la elaboración de la demanda, de modo que no se exige la constancia de determinados aspectos, siempre que de su redacción se pueda deducir el motivo de la demanda.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46.- Recursos contra autos y sentencias en la jurisdicción civil:

- a) Contra autos no definitivos cabrá recurso de reposición ante el mismo Tribunal que dictó la resolución recurrida, pero contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión solo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación.
- b) Contra autos definitivos y aquellos otros que la ley expresamente señale, cabe recurso de apelación.
- c) Contra sentencias dictadas en toda clase de juicio, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 3.000 euros, cabe recurso de apelación.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

47.- El procedimiento penal abreviado:

- a) Se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales.
- b) Se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales.
- c) Se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con penas no privativas de libertad, sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

48.- En el procedimiento penal abreviado:

- a) En la primera comparecencia el Juez informará al investigado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le informará de sus derechos, en particular de los enumerados en el apartado 1 del artículo 118 de la LECrim.
- b) En la primera comparecencia el Secretario judicial informará al investigado de sus derechos y de los hechos que se le imputan.
- c) En la primera comparecencia el Juez informará al investigado de sus derechos, en particular de los enumerados en el apartado 1 del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de los hechos que se le imputan, en la forma más comprensible.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

49.- El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se usa:

- a) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: que sea un delito flagrante; que se trate de alguno de los delitos enumerados en el artículo 795.1.2ª de la LECrim; o que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.
- b) Siempre que el proceso penal se inicie en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial.
- c) Cuando concurren a la vez estas tres circunstancias: que sea un delito flagrante; que se trate de un delito de hurto o robo; y que se presuma que su instrucción será sencilla.
- d) Las respuestas a y b son correctas

50.- El recurso de apelación en la jurisdicción penal deberá fundamentarse en estos motivos:

- a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación, pero esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.
- b) Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.
- c) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

51.- La pena de inhabilitación especial con la que se castiga la prevaricación, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal:

- a) Se trata de una pena privativa de derecho e implica para el funcionario condenado una suspensión de empleo durante el tiempo de duración de la condena.
- b) Produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.
- c) Sus efectos están regulados en el artículo 42 del Código Penal que dispone que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayera, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos; y produce también la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

52.- Comete el delito de tráfico de influencias:

- a) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.
- b) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

c) El delito de tráfico de influencias, como tal, ya no existe en el actual Código Penal.

d) El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaleciéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

53.- Delimitación de los tipos contractuales en la Ley de Contratos del Sector Público:

a) Los contratos administrativos pueden ser contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

b) Los administrativos pueden ser contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.

c) No existe una lista cerrada de contratos administrativos, ya que cualquier contrato puede ser administrativo si entre sus partes se encuentra una entidad perteneciente al sector público.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

54.- Formalización de los contratos administrativos:

a) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores siempre se perfeccionan con su formalización.

b) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización.

c) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores, que siempre pueden adjudicarse verbalmente, y de los contratos basados en un acuerdo marco, se perfeccionan con su formalización.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

55.- El perfil del contratante:

a) El perfil del contratante agrupa la información y documentos relativos a la actividad contractual del órgano de contratación, relativos a su actividad contractual, al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.

b) El perfil del contratante agrupa la información y documentos relativos a cada una de las empresas que quiere contratar con un poder adjudicador, con el fin de tener toda la información actualizada siempre disponible para dicho poder adjudicador.

c) El perfil del contratante es de libre acceso, con la finalidad de que todas las empresas que deseen contratar con un poder adjudicador puedan conocer los datos que aportan sus rivales en la licitación.

d) Las respuestas b y c son correctas.

56.- Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

a) Mediante aval solidario formalizado por entidades financieras de depósito o de crédito inscritas en el Registro de bancos y banqueros o de cooperativas de crédito legalmente autorizadas para dicha actividad en el territorio español.

b) Cuando no resulte posible, por causa justificada, la constitución del aval solidario, podrán admitirse otros medios de garantía, como la hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento de la posesión, seguro de caución, aval, fianza personal o cualquier otra que se estime suficiente.

c) En efectivo o en valores (que en todo caso serán de Deuda Pública), mediante aval, mediante contrato de seguro de caución o, en su caso, mediante retención en el precio.

d) Las respuestas a y b son correctas.

57.- La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del expediente de contratación, que se inicia:

a) Con un certificado de existencia de crédito o documento equivalente, que acredite la existencia de financiación y la fiscalización previa de la intervención.

b) Con la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

c) Con la motivación, por el órgano de contratación, de la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

58.- En relación con los contratos menores:

a) En el expediente de contratación en contratos menores se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) En los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público establezcan.

c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 45.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

d) Las respuestas b y c son correctas.

59.- Prerrogativas del órgano de contratación:

a) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento y modificarlos por razones de interés público.

b) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

c) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inspeccionar las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

60.- Están legitimados para interponer recurso especial en materia de contratación:

a) Cualquier persona física o jurídica, aunque no haya participado en el procedimiento.

b) Solamente las personas, físicas o jurídicas, que hayan participado en el procedimiento a título de licitadores, y las organizaciones sindicales cuando las actuaciones o decisiones recurribles pudieran afectar a sus intereses.

c) Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

d) El recurso especial en materia de contratación está reservado para las Administraciones Públicas en el ejercicio de su facultad de control.

RESPUESTAS CORRECTAS:

1.- b	8.- b	15.- d	22.- d	29.- a	36.- d	43.- a	50.- d	57.- c
2.- b	9.- d	16.- a	23.- b	30.- c	37.- a	44.- b	51.- c	58.- a
3.- b	10.- d	17.- a	24.- b	31.- a	38.- b	45.- a	52.- d	59.- d
4.- c	11.- c	18.- a	25.- a	32.- c	39.- d	46.- d	53.- b	60.- c
5.- d	12.- d	19.- d	26.- d	33.- b	40.- d	47.- a	54.- b	
6.- d	13.- b	20.- c	27.- d	34.- a	41.- d	48.- a	55.- a	
7.- a	14.- d	21.- b	28.- c	35.- c	42.- d	49.- d	56.- c	